JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Medellín, veintiuno de enero de dos mil veintidós

Proceso	Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía
Demandante	RF ENCORE
Demandado	JOHN JARIO MUÑOZ CIFUENTES
Radicado	05001 40 03 028 2017-00146 00
Instancia	Única
Providencia	No repone auto.

El abogado DIEGO FERNANDO COLLAZOS, presenta sustitución del poder para la abogada MARÍA ELENA RAMÓN ECHAVARRÍA. De conformidad con el artículo 75 del C. G. P., se acepta como abogada sustituta a la Dra. Ramón Echavarría portadora de la Tarjeta Profesional No. 181.739 del Consejo Superior de la Judicatura y se le reconoce personería para los efectos y facultades otorgadas en el poder conferido por la parte actora.

De otro lado la apoderada sustituta de la parte actora presentó oportunamente recurso de reposición en contra del auto del 02 de noviembre de los corrientes, mediante el cual se terminó el presente proceso por desistimiento tácito, pues el Despacho consideró que la parte ejecutante no cumplió con la carga que fue impuesta a éste el 29 de enero de 2020.

Al respecto la parte actora manifiesta que de conformidad de los artículos 111, 42 numeral 1 y 49 del Código General del Proceso y en concordancia con el artículo 11 del decreto 806 de 2020 el juzgado debió remitir el oficio de requerimiento ante la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. Lo anterior en aras de lograr la respuesta efectiva de la misma ya que para la época de los requerimientos realizados era complejo el acceso a los juzgados de manera presencial por la situación que se está viviendo del Covid-19 para el trámite de estos.

Sin necesidad de correr traslado del referido recurso según lo dispone el artículo 319 del C.G.P., por cuanto no se ha trabado la relación jurídico-procesal, se procede entonces a resolver previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Preceptúa el artículo 111 del C.G.P., que los tribunales y jueces deberán entenderse entre sí, con las autoridades y con los particulares, por medio de

despachos y oficios que se enviarán por el medio más rápido y con las debidas seguridades. **Los oficios y despachos serán firmados únicamente por el secretario. Las comunicaciones de que trata este artículo podrán remitirse a través de mensajes de datos.**

El juez también podrá comunicarse con las autoridades o con los particulares por cualquier medio técnico de comunicación que tenga a su disposición, de lo cual deberá dejar constancia.

Así mismo señala el artículo 125 del CG. P., que: *“La remisión de expedientes, oficios y despachos se hará por cualquier medio que ofrezca suficiente seguridad.*

El juez podrá imponer a las partes o al interesado, cargas relacionadas con la remisión de expedientes, oficios y despachos.

A su vez el artículo 11 del Decreto 806 de 2020 que, “Todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario, se surtirán por el medio técnico disponible, como lo autoriza el artículo 111 del Código General del Proceso.

Los secretarios o los funcionarios que hagan sus veces **remitirán las comunicaciones necesarias** para dar cumplimiento a las órdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas a cualquier entidad pública, privada o particulares, las cuales se presumen auténticas y no podrán desconocerse siempre que provengan del correo electrónico oficial de la autoridad judicial.

Así mismo, la Circular PCSJC 20-19 del 16 de Junio de 2020, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dispuso el aplicativo Web de la firma electrónica de la Rama Judicial, buscando con dicha herramienta “apoyar el trabajo remoto y electrónico por parte de los servidores de la Rama Judicial durante el periodo de la emergencia, a través de un mecanismo apropiado que cumple con el principio de la equivalencia funcional con la misma validez y efectos que una firma manuscrita”

Para el caso particular el Despacho en providencia del 23 de agosto de 2021, requirió a la parte demandante de conformidad a lo estipulado en el artículo 317 del C.G.P., para que procediera a gestionar la entrega del oficio dirigido a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO para que de forma

inmediata dieran cumplimiento a lo solicitado mediante el oficio No. 2106 del 23 de julio de 2019. Tal requerimiento obedeció a que es la parte demandante en quien radica la carga para el diligenciamiento de los oficios que se profieran dentro del proceso, además que el expediente digital había sido compartido con ésta desde el 02 de agosto de 2021, de lo cual se dejó la respectiva constancia *“Se procede a **compartirle el expediente digital** a fin de que tenga acceso a las actuaciones surtidas, para que proceda a gestionar las actuaciones que haya lugar, luego deberá aportar la respectiva prueba de ello al Juzgado.”* (ver Doc. 06 del expediente digital).

Así mismo, obsérvese, que la orden de oficiar a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, data de una orden impartida por el Juzgado desde el 29 de enero de 2020, y que el oficio fue firmado por la Secretaria del Despacho de forma manuscrita, con el respectivo sello (ver fl. 87 Doc. 02 Carpeta Principal del Expediente Digital), y no de forma electrónica, a su vez la ejecutante no retiró el oficio como tal para su diligencia.

El 23 de agosto de 2021, al no haber prueba en el expediente de la entrega del oficio antes referenciado por parte de la parte ejecutante, el Juzgado requirió a ésta de conformidad al artículo 317 del C. G. P., para que procediera a gestionar la entrega del documento aludido en el párrafo anterior.

Carga procesal, que es posible atenderla por la parte, pues es claro que fue establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.

Amén de que el gran cumulo de procesos por atender en los despachos civiles municipales, hace imperiosa la necesidad de imponer algunas cargas a los sujetos procesales, para lograr el debido avance en el trámite, para recortar los lapsos e impedir incurrir en mora en el avance de las funciones del Despacho, argumento que encuentra pleno fundamento legal, al establecer el artículo 125 del C.G. del P. que *“El juez podrá imponer a las partes o al interesado, cargas relacionadas con la remisión de expedientes, oficios y despachos.”*, sin olvidar la mutua colaboración entre partes y juez para lograr el debido avance en la

atención de los procesos, lo que redundará en una adecuada prestación del servicio de justicia.

Ahora, en el lapso concedido para el cumplimiento de la carga, la parte actora no se pronunció al respecto, no dio cumplimiento a lo indicado ni realizó ningún otro impulso a la demanda. De tal manera, en lo que se refiere al conteo del término para decretar la terminación por desistimiento tácito, no se observa error alguno por parte del Juzgado, y por ello se finiquitó el proceso de tal manera

Pretende la actora la reposición de dicha actuación, invirtiendo la carga de la entrega del oficio, argumentando que el envío del oficio recaía en el Despacho, debido al aislamiento obligatorio por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, y a las medidas decretadas en materia civil entre las que se encuentran el Decreto 806 del 04 de junio de 2020, y más concretamente su artículo 11, esto es que, *“Todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario, se surtirán por el medio técnico disponible, como lo autoriza el artículo 111 del Código General del Proceso”*, al cual el Juzgado le dio pleno cumplimiento, ya que remitió de manera virtual a la parte interesada el expediente digital en el cual se encontraba el oficio No. 2106 del 23 de julio de 2019 (ver Doc. 06 Exp Digital), pues era el medio técnico disponible con el que contaba el Despacho para que la parte actora procediera con su envío, carga procesal que puede ser impuesta legítimamente a la parte teniendo en cuenta las disposiciones del art. 111 y 125 del C.g. del P. y que no fueron derogadas por el Decreto 806 de 2020, máxime cuando el objetivo de esta norma es tener certeza de la autenticidad del documento, autenticidad que según la norma se logra con el envío del escrito desde la cuenta institucional del respectivo despacho, **pero ello en modo alguno descarta, que la autenticidad también la da la firma impuesta en el documento, y que la entidad bien puede comprobarla, en razón a que el aplicativo de la firma digital lo permite.**

La parte entonces no cumplió con lo ordenado por lo ordenado por el Juzgado, ya que desde la elaboración del oficio No. 231, la parte no acudió al Despacho para hacer el retiro desde la fecha en que se encontraba disponible en el expediente físico y hasta antes de que se presentara el aislamiento obligatorio, y una vez compartido el expediente digital, tampoco remitió la comunicación, como se puede avizorar en el contenido del expediente digital, e incluso no se hizo ninguna solicitud al respecto por parte de la actora, así como tampoco demostró

la negativa de la entidad destinataria de la recepción del oficio, porque no provenía de la cuenta institucional del Despacho, por lo que necesario se hace concluir desentendió abiertamente el requerimiento realizado.

Y es que, era la parte actora la directamente interesada en que se perfeccionara esa solicitud para la continuidad del trámite del asunto. Es una CARGA que solo a ella le correspondía, es decir, podía decidir radicar o no el oficio. Además, parece olvidar la recurrente que el artículo 1 del Decreto 806 de 2020 también compete a los SUJETOS PROCESALES en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

No obstante lo anterior, es relevante mencionar que frente a la figura del desistimiento tácito no solo se mira la “presunción de desinterés”, sino que la misma tiene otras finalidades, como se explicó la Corte Suprema de Justicia en proveído STC11191 del 9 de diciembre de 2020, M.P. Octavio Augusto Tejeiro:

“quienes allí ponen el acento olvidan que la razón de ser de la figura es ajena a estas descripciones, pues fue diseñada para conjurar la «parálisis de los litigios» y los vicios que esta genera en la administración de justicia.

Recuérdese que el «desistimiento tácito» consiste en «la terminación anticipada de los litigios» a causa de que los llamados a impulsarlos no efectúan los «actos» necesarios para su consecución. De suerte que a través de la medida, se pretende expulsar de los juzgados aquellos pleitos que, en lugar de ser un mecanismo de resolución de conflictos se convierten en una «carga» para las partes y la «justicia»; y de esa manera: (i) Remediar la «incertidumbre» que genera para los «derechos de las partes» la «indeterminación de los litigios», (ii) Evitar que se incurra en «dilaciones», (iii) Impedir que el aparato judicial se congestione, y (iv) Disuadir a las partes de incurrir en prácticas dilatorias -voluntarias o no- y a propender porque atiendan con lealtad y buena fe el deber de colaboración con la administración de justicia.” (subrayas nuestras).

Siendo así, frente a la carga argumentativa que exige el recurso de reposición, **el Juzgado mantiene la convicción de haber obrado correctamente**: la parálisis del proceso durante el término legal consagrado, imponía una única decisión, esto es, la terminación de la actuación por desistimiento tácito.

Por los argumentos esbozados, no habrá de reponerse la decisión adoptada en el auto de fecha 02 de noviembre de 2021.

De otro lado, respecto a la petición de apelación, se tiene que a voces de lo dispuesto en el Art. 321 del Código General del Proceso, son apelables los autos proferidos en primera instancia, por lo que el auto recurrido no es susceptible de dicho recurso, toda vez que estamos en presencia de un asunto de mínima cuantía y por ende de única instancia, por lo tanto no habrá lugar concederse el recurso de apelación solicitado.

No siendo otro el objeto de la presente providencia, el JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto del 02 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NO CONCEDE el recurso de apelación conforme lo establece el Art. 321 del C. G. del P., y la parte motiva.

Tercero: ARCHIVAR las diligencias una vez quede en firme la presente decisión.

NOTIFÍQUESE

10.

Firmado Por:

Sandra Milena Marin Gallego

Juez

Juzgado Municipal

Civil 028 Oral
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f5081c1276c1fedae0d063a15342ef9655886246b2876ee9c89cf91bc3f1ec05**

Documento generado en 21/01/2022 08:11:20 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>